

11 de septiembre de 1973:

El golpe fascista en Chile

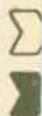
Ramiro Aldao

«Hay momentos en que los procedimientos democráticos deben ser introducidos, y hay momentos en que semejante introducción debe ser evitada (...). Ello implica que nosotros necesitamos adquirir las técnicas para mantener la fuerza del liderazgo de quienes deberíamos desaprobamos en otras condiciones».

JAMES R. SCHLESINGER, director de la CIA en 1973.

EL 11 de septiembre de 1973, desde su cuartel general de Peñaolén, en la falda de los cerros que rodean a Santiago, el general Augusto Pinochet supervisa el asedio al Palacio de la Moneda. Es inútil que el presidente Allende, a través del subsecretario de Guerra, lo invite a hacerse presente para plantear su posición. No lo hará. Al igual que el resto de los altos mandos de las fuerzas armadas, nunca se ha atrevido —ni tampoco

Allende lo ha permitido— a formular una apreciación política ante la máxima autoridad legal del Estado. Ahora, como si el peso de la inercia lo arrastrara, teme presentarle al Presidente, personalmente, la exigencia de su dimisión. Allende y quienes lo acompañan en la Moneda sólo la conocerán por medio de los comunicados que intermitentemente transmite la radio, firmados por la flamante Junta Militar, que acabará por hacerse con el poder.





4 de septiembre de 1970. Han concluido las elecciones presidenciales que darían el triunfo a la Unidad Popular, y el pueblo se lanza a las calles para festejarlo. Sin embargo, la reacción apelará todavía a todos los medios para impedir la entrada de Allende en la Moneda.

HASTA entonces, Pinochet no sólo ha sido un militar celoso de su «profesionalismo». A la sombra del ex comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, ha alimentado consecuentemente su reputación de oficial «constitucionalista», empecinado, contra todos los avatares, en defender la estabilidad del Gobierno surgido del mandato popular. En junio de 1971, al declararse el estado de emergencia en la capital tras el asesinato del ex ministro democristiano Pérez Zujovic, como jefe de la guarnición de Santiago declara solemnemente ante Allende: «Presidente, el ejército responde del control de la situación. Y puede estar usted seguro de su disciplina. Al primer coronel que se mueva, yo mismo le pego un tiro» (1).

(1) Esta cita, así como la mayoría de las que se incluyen en el presente trabajo, ha sido extraída de: Joan E. Garcés, *Allende y la experiencia chilena. Las armas de la política*, Barcelona, Ariel,

Y aún el 3 de septiembre de 1973, apenas una semana antes del golpe, advierte al ministro de Defensa acerca del peligro de un levantamiento, del que se corre «el riesgo —dice— de que esta vez sea del conjunto de las fuerzas armadas, no de una unidad aislada como el 29 de junio».

Esta actitud le valdrá desde un principio la confianza absoluta tanto de Allende como de Prats, quienes contarán siempre con él a la hora de planificar una estrategia anti-institucional contra los sectores golpistas de las fuerzas armadas. Pero también será de inestimable valor para su propósito de heredar la comandancia en jefe del ejército, una vez que el propio Prats —y con él todo el sector de oficia-

1976. También se ha consultado: para la muerte del Presidente, *Estos mataron a Allende*, de Robinson Rojas, Barcelona, edic. Martínez Roca, 1974; para la cronología general del proceso, *Chile: el largo camino al golpe*, de Ignacio Galyango, Barcelona, Diosa, 1974.

les «constitucionalistas» — sea neutralizado en el seno del arma por la lógica inflexible de los acontecimientos.

El comandante en jefe es una pieza vital en el ajedrez golpista. En un ejército altamente jerarquizado, su adhesión o su enfrentamiento a la estructura institucional vigente (en la medida en que la solidez o debilidad de dicha estructura sirva de contexto apropiado) arrastrará necesariamente al conjunto de la institución, y al resto de las instituciones armadas, a pesar de la existencia de eventuales discrepancias en los mandos intermedios y aun en sectores del estado mayor. Los casos de los generales René Schneider, comandante en jefe hasta su asesinato a manos de un comando terrorista, el 22 de octubre de 1970, y Carlos Prats, forzado a renunciar por la oficialidad golpista el 23 de agosto de 1973, son suficientemente reveladores al respecto.

La actitud intransigente de Schneider había hecho fracasar los variados intentos puestos en práctica por la ITT, la CIA, el Departamento de Estado norteamericano (Kissinger) y el entonces presidente Frei, para impedir el acceso de Salvador Allende al poder. Tales planes tomaron cuerpo vertiginosamente entre el 4 de septiembre, fecha de las elecciones en las que resultó vencedora la Unidad Popular, y el 3 de noviembre de 1970, cuando tiene lugar la transmisión del mando presidencial. Schneider pagaría con su vida su inquebrantable decisión de hacer respetar el orden constitucional. En cuanto a Prats, su subordinación al gobierno legítimo significará la contención de los oficiales más estrechamente ligados a los secto-

res oligárquicos y conservadores, e incluso, cuando éstos deciden tomar las armas, su aislamiento y derrota, como ocurrió, por ejemplo, en oportunidad de la sublevación del Regimiento de Blindados N.º 2 (el «tanco»), el 29 de julio de 1973.

La elevación de Pinochet a la comandancia en jefe parece asegurar, esta vez, la factibilidad de los designios golpistas. Sin embargo, todavía será necesario efectuar «correcciones» en el seno del ejército, en algunos de cuyos sectores no se puede descartar el eventual impacto de casi tres traumáticos años de gobierno popular. Estas medidas ya habían sido tomadas, meses atrás, dentro de la Armada, donde, al detectarse un numeroso grupo de marineros y suboficiales adic-

tos a la Unidad Popular, se los detiene y tortura por orden del comandante de la Primera Zona Naval de Valparaíso (y futuro miembro de la Junta Militar), almirante José Toribio Merino. Consumado el golpe, los prisioneros serán asesinados en sus mismos sitios de detención.

En el Ejército, el arresto de cincuenta oficiales en todo el país, durante la misma madrugada del 11 de septiembre, constituye la expresión cabal del temor que embarga a Pinochet, y que éste confesará un año más tarde: «Habría bastado un departamento, una sola unidad que no hubiera cumplido las órdenes que emanaban desde Santiago, para que de inmediato este país hubiese entrado en una guerra civil».



Allende se dirige a depositar su voto en las elecciones que lo consagrarían presidente de la República. Antes de 1970, había sido candidato de las fuerzas de izquierda por tres veces consecutivas.

Pinochet no se equivocaba. Durante los tres años de gobierno de la Unidad Popular, en la Presidencia de la nación se había venido trazando el único esquema posible de contención de la insurrección militar, la cual únicamente podría ser desarticulada en la medida en que se enfrentara un sector definido de las propias fuerzas armadas. Allende estimaba que un enfrentamiento de este tipo permitiría que se ganase el tiempo adecuado para que una parte de las tropas, suboficialidad e incluso oficialidad envueltas en la aventura golpista, volviese sus armas contra el propio bloque insurrecto. En estas circunstancias —y sólo en ellas— se podía movilizar a los trabajadores, armándolos para actuar en forma conjunta con los militares leales al Gobierno y la Constitución (2). El mismo Pinochet, como comandante en jefe subrogante, primero, y luego como comandante titular, había participado en la elaboración de

(2) La posibilidad de una articulación clase obrera-sector constitucionalista de las FF.AA. estaba contemplada en la antigua Ley de Defensa Civil. Sin embargo, dicha Ley nunca fue aplicada en los tres años de gobierno UP, por los desacuerdos tácticos registrados entre los partidos integrantes de la coalición.

este diagrama estratégico, y sabía, en consecuencia, ahora como cabecilla de la subversión, que era imprescindible actuar decidida y rápidamente en **dos frentes**, si se quería dominar con un mínimo de riesgos la situación. A tal efecto, no bastaba neutralizar o arrestar a la oficialidad democrática o sospechosa de tal: se imponía romper el vínculo entre ésta y la clase obrera organizada en la Central Unica de Trabajadores (CUT), estableciendo un férreo círculo en torno de fábricas, barriadas y cordones industriales, en los principales centros productivos del país. En segundo término, había que actuar de manera directa en el eje mismo del frente civil, liquidando a los miles de obreros que, potencialmente, constituían la vanguardia de la contrainsurrección.

De hecho, durante los dos meses anteriores al golpe, las fuerzas armadas habían venido ensayando exitosamente esta táctica contra los trabajadores. Al producirse el motín del 29 de junio, el Gobierno decide aplicar la Ley de Control de Armas que, por iniciativa de la Democracia Cristiana, había sido aprobada a me-

diados de 1972, con el voto afirmativo de la Unidad Popular. Teóricamente, la instrumentación de la ley debía servir para combatir al terrorismo de ultraderecha, que amenazaba con paralizar y destruir el Estado, derrumbando al mismo tiempo al Gobierno constitucional. En la práctica, sin embargo, se la utilizó para desencadenar una violenta ofensiva contra los obreros adictos a los partidos constitutivos del frente gubernamental.

De este modo, a lo largo de los meses de julio y agosto, el ejército, en todo el país, irrumpe en fábricas, sindicatos y locales de partidos de izquierda, en una típica maniobra de provocación. El número de armas que se encuentra es, desde luego, insignificante. Pero no son precisamente armas lo que en estos operativos se pretende detectar. Más allá de la intimidación, el objetivo de los militares golpistas consiste en preparar a las tropas para el asalto final y, muy especialmente, en localizar y diferenciar al enemigo fundamental, entre la inmensa masa de trabajadores que forman la base social del gobierno popular. En última instancia, la ley de control de armas serviría para rellenar las listas de los treinta mil asesinados y los sesenta mil encarcelados y torturados que, seis meses después del golpe, constituirán el trágico balance del gobierno militar.

7 DE SEPTIEMBRE: «USTED SIEMPRE TENDRA MI LEALTAD INCONDICIONAL»

El viernes 7 de septiembre de 1973, al atardecer, Pinochet viaja en helicóptero hasta Valparaíso, a cien kilómetros de la capital, en cuyo puerto la



El presidente Eduardo Frei felicita a Allende tras su confirmación como jefe del estado por el Parlamento. El líder democristiano había sido justamente uno de los principales promotores de la maniobra por la que se intentó escamotear la victoria popular en el Congreso.

escuadra naval se ha amotinado, negándose a zarpar. Dos días antes, significativamente, tres destructores y un submarino de la armada norteamericana llegan hasta las costas de Chile para realizar maniobras conjuntas correspondientes al Operativo Unitas, cuyo origen data del comienzo de la guerra fría. Los marinos chilenos rehúsan participar de estas operaciones, si antes no renuncia a la comandancia del arma el almirante Raúl Montero, designado por Allende en noviembre de 1970, para ser reemplazado por el almirante Merino, uno de los líderes principales de la conspiración.

En Valparaíso, Pinochet intentará «disuadir a los marinos de hacer cualquier locura», y ese mismo día, en conversación telefónica con Allende, le dice: «Usted siempre tendrá mi lealtad incondicional, Presidente» (3). A renglón seguido informará que «todo está en calma» en la Primera Zona Naval y que la escuadra, acatando a su comandante natural, abandonará el puerto el lunes 10, para reunirse en alta mar con las naves de guerra de los Estados Unidos.

Mientras tanto, por la noche, la dirección del complot dentro del ejército ya ha decidido la fecha definitiva en que tendrá lugar el golpe de estado: será el viernes siguiente, 14 de septiembre, aprovechando los movimientos de tropas previos a la parada del 17, día en que se festeja la independencia nacional. Esto no lo sabe todavía el embajador norteamericano en Santiago, Nathaniel Davis (4), quien esa

(3) También el día 7 Pinochet dirigirá una carta a Prats en la que le señala su «inquebrantable resolución» de que «el ejército continúe cumpliendo su función institucional y respaldando al gobierno constitucional».

(4) Según Robinson Rojas (en su obra



Allende junto al comandante en jefe del Ejército, general Prats, durante una visita del primer mandatario a Punta Arenas, en el sur del país. Prats sería el último escollo que tendrían que eliminar los golpistas para agrupar a las fuerzas armadas en torno de sus objetivos.

misma mañana comunica telefónicamente al ministro de Defensa, Orlando Letelier, que ha sido convocado urgentemente a Washington por Henry Kissinger, y que estará de regreso en la capital el martes 11. Davis solicita audiencia al ministro para el miércoles 12, oportunidad en que discutirá con él temas relativos a la compra de armamentos para las fuerzas armadas chilenas en los Estados Unidos.

Sin embargo, dos días después, el domingo 9, un factor imprevisto obligará al representante norteamericano a abreviar en 24 horas las conversaciones con el jefe del Departamento de Estado. Se trata de la decisión del presidente Allende de anunciar públicamente, en las próximas horas, la convocatoria de un referéndum «para que el país decida el camino a seguir», en medio de la grave crisis eco-

citada, pág. 241), quien a su vez se basa en un informe de Nacla's Latin American and Empire Report, Davis fue director de Cuerpos de Paz en Chile en 1962, y en 1968 fue destinado a Guatemala, donde dirigió un «programa de pacificación política» similar a los realizados en Vietnam. Para 1971, ese programa había dejado 20.000 personas muertas.

nómica e institucional que se ha producido desde los últimos meses. Esta medida ha sido comunicada personalmente por el mandatario al comandante en jefe y al inspector general del ejército, general Urbina, durante una entrevista celebrada al mediodía en la residencia oficial de Cañaveral, y ya por la tarde Pinochet se encuentra reunido en su propio domicilio con el comandante en jefe de la fuerza aérea, general Leigh, y con el almirante Huidobro (5), representante de los marinos conspiradores de Valparaíso, para analizar la inesperada resolución presidencial a la luz de los proyectos golpistas. Para Pinochet, el anuncio al pueblo chileno del referéndum privaba de base de sustentación a la sublevación programada. En primer lugar, porque —a partir de ciertas declaraciones suyas a la prensa en el primer aniversario del golpe— presumiblemente los oficiales conjurados esperaban, para los días inmediatamente anteriores al estallido de la insurrección, algún brote de violencia, fuese

(5) Huidobro era director de la Escuela de Infantería de Marina, donde se adiestraban los grupos fascistas civiles.



En junio de 1971, el gobierno popular establece por primera vez el estado de emergencia en Santiago, intentando neutralizar la ofensiva de la derecha que se lanza con violencia a la calle. Como jefe de la zona Pinochet declarará entonces su «lealtad» al Presidente constitucional.

de la oposición o de la propia base de la Unidad Popular, que justificase una intervención militar para restablecer la «paz» y asegurar el «orden». En cierto modo estas expectativas estaban justificadas por el nivel insostenible de las tensiones, las cuales eran las mismas que habían determinado a Allende a anunciar la convocatoria del plebiscito. Pero el mismo anuncio del plebiscito estaba destinado a aliviar esas tensiones y, por lo tanto, a disipar toda posibilidad de extrema violencia.

En segundo lugar —y esto parece más evidente—, la convocatoria tendería a resquebrajar el frente civil golpista, introduciendo una cuña entre los sectores más y menos recalcitrantes (partido Nacional y partido Demócrata Cristiano). Si los democristianos (o al menos su sector más moderado) veían la posibilidad de rectificar la orientación del gobierno a través de un referéndum —y esa posibilidad

existía, dado el reagrupamiento en bloque de la clase media alrededor del partido que objetivamente la representaba—, no era improbable que diesen la espalda al golpe en gestación, volviendo a concentrar todo su poder de fuego en la lucha exclusivamente política. La división del frente civil golpista, por último, repercutiría en la cohesión del frente militar, donde los democristianos tenían también sus representantes (uno de ellos, el general Oscar Bonilla, amigo íntimo de Frei, acabaría siendo ministro del Interior de la Junta).

La conclusión era obvia: había que adelantar la fecha del golpe lo antes posible, fijándola, si se pudiera, para el día siguiente, lunes 10. Sin embargo, razones técnicas determinarían que el día «D» sea finalmente el 11, estableciéndose las 6.00 del martes como hora «H» para la Marina en Valparaíso, y las 7.30 para el ejército en Santiago. Como explicará uno de los oficiales

conspiradores acerca de esta diferencia: «Allende venía sosteniendo una lucha abierta con la marina, y la diferencia de tiempo buscaba distraerle para que pensara que sólo se enfrentaba con una pequeña revuelta naval». De hecho, la demora de noventa minutos en el pronunciamiento del ejército, constituiría el comentario trágico a la grande y prolongada confianza depositada por Allende en Pinochet.

El embajador Davis recibió la noticia en Washington, a través de la representación diplomática norteamericana en Santiago. También Nixos y Kissinger. Este último, al frente del Comité 40, había venido realizando sustanciosas contribuciones en dólares, a lo largo de los últimos años, en favor de todo movimiento de oposición al gobierno de la Unidad Popular, ya se tratase de los transportistas en huelga, de los partidos Demócrata Cristiano o Nacional, del sedicioso «El Mercurio» (máxima expresión de la prensa oligár-

quica latinoamericana), o de los grupos terroristas tales como la ultraderecha «Patria y Libertad». La última, de un millón de dólares, se había hecho efectiva el 22 de agosto de 1973, y ahora revelaba su rentabilidad a corto plazo (6).

El lunes 10 por la tarde, Davis llegaba apresuradamente a Santiago, y poco después, desde los aparatos de radio

(6) *El 12 de septiembre de 1973, al preguntarle los periodistas al general Juan Perón (a punto de asumir por tercera vez la presidencia de la Argentina) si él creía que había existido intervención norteamericana en el golpe chileno de la víspera, respondió: «No podría demostrarla, pero creo que sí, creo profundamente que sí. Como conozco estos procesos, cómo no voy a saber. Si ayer mismo los comentarios decían que había farra (fiesta) en el Departamento de Estado». El mismo Perón había sido víctima de la intromisión de los Estados Unidos en la política interna de su país. En 1945-46, durante la campaña electoral que lo llevaría por primera vez a la presidencia, la consigna popular había sido: «Braden (embajador de EE.UU.) o Perón».*

instalados en el ministerio de Defensa, partía un mensaje hacia las unidades de la flota norteamericana afectadas al Operativo Unitas. Las naves, que en ese momento se dirigían a toda máquina en dirección a aguas jurisdiccionales chilenas, reciben la orden de separarse en dos grupos, debiendo permanecer dos destructores «a más de doscientas millas de Valparaíso, mar afuera», y el destructor y el submarino restantes a más de doscientas millas de Talcahuano. La razón de este cambio imprevisto de planes era —según el comunicado— que la Operación Unitas «puede postergarse indefinidamente».

11 DE SEPTIEMBRE: LOS COMANDANTES NO CONTESTAN

El 11 de septiembre, a las 6.00

de la mañana, la marina está en pie de guerra. La víspera, la escuadra anclada en Valparaíso había abandonado este puerto, tal como lo ordenara el comandante en jefe de la armada, almirante Raúl Montero, para reunirse con las naves norteamericanas, pero, a poco navegar, sus unidades volvían la proa y se dirigían nuevamente hacia el sitio de zarpada. Al amparo de la noche, atracaban en Valparaíso, mientras sus hombres se aprestaban en ocupar rápidamente la ciudad.

En su domicilio privado de la calle Tomás Moro, el presidente Allende es informado poco antes de las siete de la sublevación. Los primeros datos de que dispone el Gobierno indican que el levantamiento se limita a la marina y que, desde Valparaíso, seis camiones con tropas se dirigen hacia Santiago. Allende ordena que

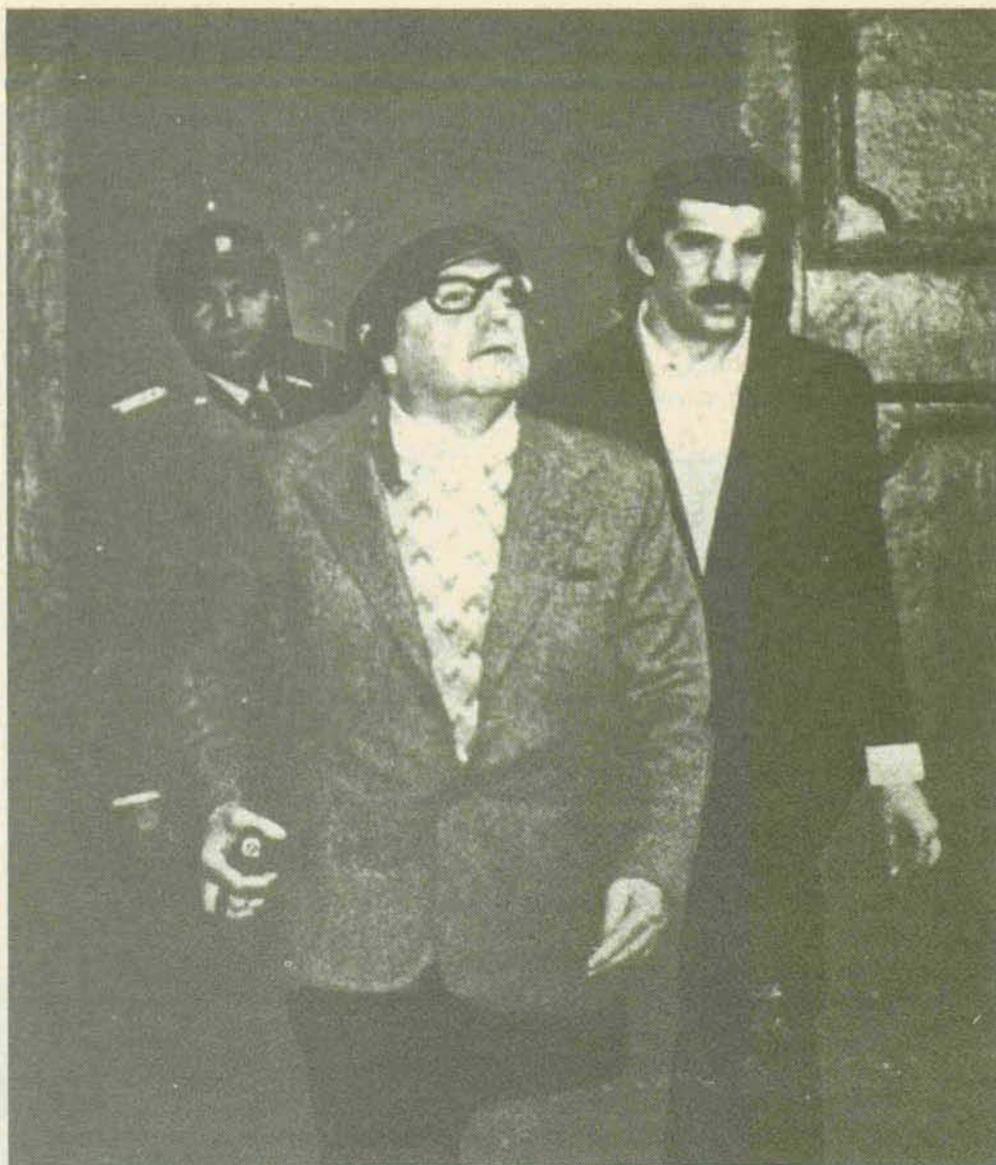


Allende pasa revista a las tropas del ejército en mayo de 1973. Un mes después se produciría la primera sublevación militar, el «tancazo», que la presencia de Prats al frente del arma logró neutralizar.

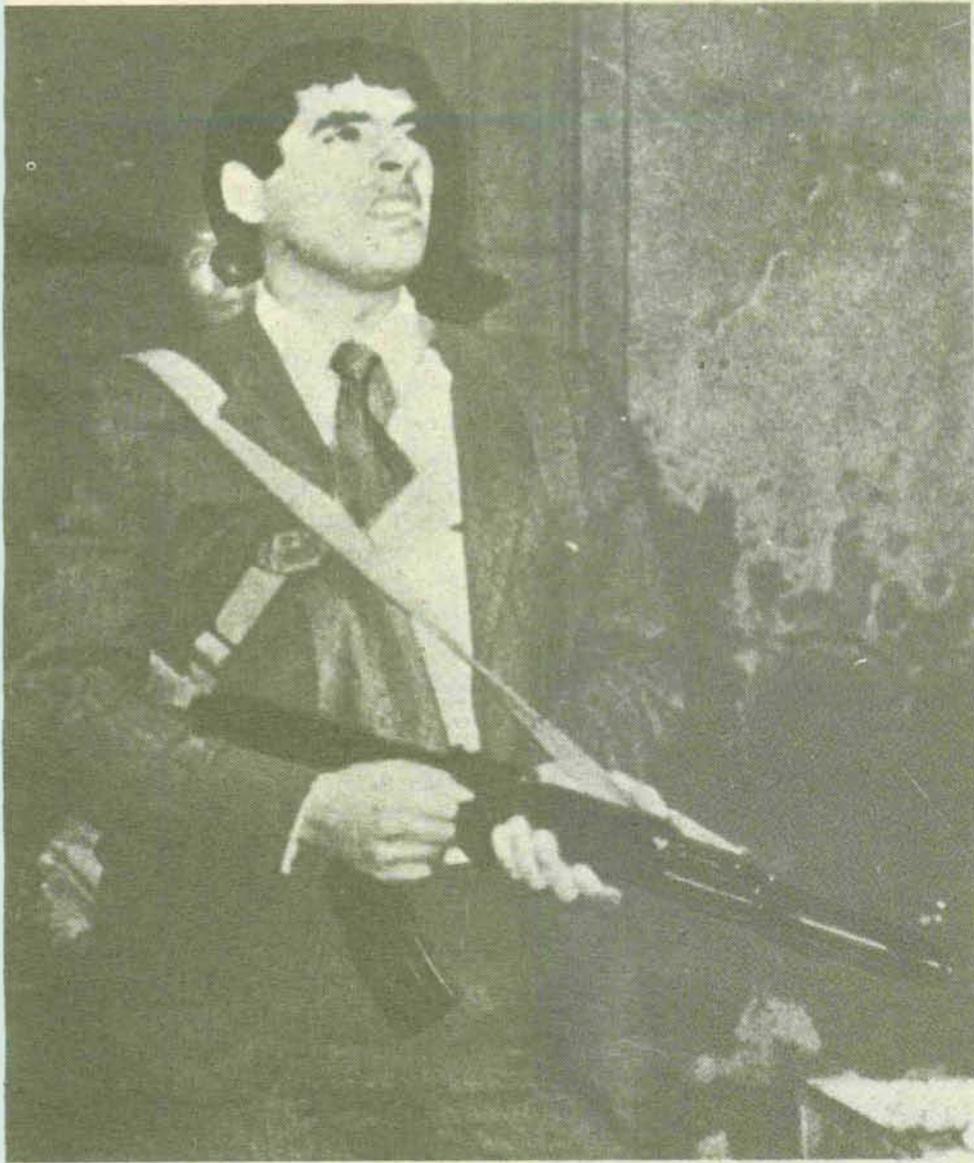
se localice al almirante Montero para que se traslade a aquella ciudad y haga frente a los insurrectos, sin saber que en la noche anterior el comandante en jefe leal ha sido destituido y hecho prisionero por el almirante Merino, jefe de la sublevación.

Montero, obviamente, no contesta al teléfono, pero tampoco lo hacen Pinochet ni Leigh.

Ya en la Moneda, y ante nuevos intentos fallidos de comunicación, el Presidente expresa su temor de que, esta vez, todos los comandantes estén comprometidos en la subversión. Sin embargo, aún dispone de Carabineros, la policía paralimitar que, extendida a lo largo y ancho del país, cuenta con una dotación de 30.000 hombres, número apenas inferior al del ejército (32.000) y muy superior al de la armada (18.000) y de la fuerza aérea (10.000). Ya a las 7.30, hora en que Allende hace su ingreso en el palacio presidencial, éste se encuentra rodeado de una gran cantidad de efectivos y tanques pertenecientes al cuerpo. Y cinco mi-



11 de septiembre de 1973. Estalla la insurrección. Tropas de infantería, con el apoyo de blindados, asediarán durante horas el palacio de la Moneda, donde sólo resisten cincuenta hombres armados con ametralladoras.



Allende encabeza la organización de la defensa de la Moneda. En el Salón Rojo —el gabinete de despacho presidencial— encontrará la muerte a manos de una patrulla de infantería del ejército, tras sortear la desesperada resistencia de sus ocupantes.

nutos después, es su propio comandante en jefe, general Sepúlveda Galindo, quien se presenta ante el mandatario para informarle de las medidas defensivas que acaba de disponer. Mientras tanto, los cincuenta carabineros que integran la guardia presidencial, ocupan normalmente sus puestos en el interior de la Moneda.

Quince minutos más tarde se tiene el primer indicio de que la fuerza aérea (o al menos un sector de ella) participa de la insurrección. Es cuando, desde la secretaría de seguridad del partido Comunista, se informa a la Presidencia que tropas pertenecientes al arma se aprestan a atacar las fábricas de la capital. Suponiendo

que aún cuenta con el apoyo del ejército, y partiendo del respaldo efectivo de Carabineros, Allende piensa que la medida dispuesta por la fuerza aérea conduce directamente a la guerra civil, y así lo expresa a sus colaboradores. Sin embargo, no está todavía claro cuál es la posición del cuerpo en su conjunto, ya que no se ha podido hacer contacto telefónico con su comandante en jefe, ni éste, hasta el momento, ha expresado unívocamente su posición.

Pero a esa hora, sin forzar demasiado las cosas, se puede anticipar cuál será la actitud final de la fuerza aérea, a poco que se vincule la información proporcionada por el Partido

Comunista con un episodio ocurrido días antes en torno de los aviones de la Línea Aérea Nacional. Al declararse los pilotos en huelga, el viernes 7, los aparatos son trasladados desde el aeropuerto civil de Pudahuel hasta la base militar de Los Cerrillos. Según explica el comandante en jefe del arma al Presidente (a requerimiento de éste), la medida ha sido dispuesta exclusivamente «para protegerlos». «¿Para protegerlos de quién? ¿Acaso del gobierno?», pregunta Allende. Y da orden de que sean restituidos a Pudahuel. Ahora está claro, sin embargo, que la orden no ha sido cumplida, y que la fuerza aérea, en su totalidad, se halla comprometida en la insurrección. Como se comprobaría poco después, los aviones de la Línea Aérea Nacional habrían de servir, durante el golpe, para el transporte de tropas y equipo a todas las zonas estratégicas del país.

Por fin, un comunicado transmitido a las 8,30 por la cadena de emisoras de la oposición (otras tres permanecen aún en manos del gobierno), define la postura de los comandantes en jefe. En el mensaje, que ninguno de ellos ha tenido el valor de plantear personalmente, se exige del Presidente «la inmediata entrega de su cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile» y el silenciamiento de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) adictos al gobierno de la Unidad Popular. Lo firma una autoproclamada Junta Militar integrada por los comandantes Leigh (fuerza aérea) y Merino (armada), el comandante en jefe del ejército, Augusto



La Moneda empieza a arder tras el bombardeo realizado por dos aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea Chilena. Lo que se quiere destruir no es solamente el Gobierno popular, sino también la forma democrática del Estado que lo hizo posible.

Pinochet, y el general César Mendoza, erigido en comandante en jefe de carabineros. La traición de Pinochet invierte el curso posible de los acontecimientos. El día anterior, en una reunión con el ministro de Defensa, aún daba muestras de «lealtad», aunque con una sugestiva modificación en su modo específico de atestiguarla. Por primera vez desde su ascensión a la titularidad del arma, se abstiene de denunciar los aprestos subversivos de quienes pretenden encabezar un levantamiento contra el gobierno

constitucional, subrayando, por el contrario, la «calma» que súbitamente ha vuelto a imperar en la institución. Era éste —y nadie lo sospechaba— el indicio evidente de que el complot acababa de salir de su fase de indeterminación, para ingresar en una etapa en la que fecha y hora, modalidad e intención, le otorgaban una operatividad concreta. En este punto, Pinochet no podía permitirse excesos «legalistas».

En medio de la ruptura de todas las tradiciones (la tradición profesionalista de las

fuerzas armadas; la tradición del equilibrio entre los poderes del estado, gravemente deteriorado por el sabotaje sistemático de la oposición; la tradición de la soberanía popular, expresada en el recurso periódico a las elecciones), la incorporación de Pinochet a la conspiración golpista representará el entierro definitivo de aquella otra tradición, según la cual el comandante en jefe del ejército jamás se alzó, en toda la historia de Chile, contra la autoridad legítimamente constituida.

En los hechos, a las 8,30, el gobierno de la Unidad Popular ya ha sido derrocado. Continuará la resistencia en la Moneda hasta las tres menos cuarto de la tarde, pero será en vano. A la traición del ejército se debe añadir el golpe de mano en Carabineros, sugerido en el comunicado de los golpistas y confirmado media hora más tarde por la actitud de los propios efectivos, que empiezan a abandonar las inmediaciones del palacio presidencial. A esa altura, el general Sepúlveda Galindo es impotente para controlar la situación: la central de comunicaciones de Carabineros, desde donde se imparten las órdenes a las tropas, ha pasado a control de los insurrectos. Y organizar una ofensiva contra éstos, para recuperarla, es imposible, ya que el general leal sólo dispone de medio centenar de hombres, más algunos oficiales, que se encuentran en la sede de la dirección general del cuerpo (a 200 metros de la Moneda).

El general Mendoza es el nuevo jefe de Carabineros. El viernes 7, durante una cena celebrada por los generales de la institución, y a la que es invitado el Presidente, tiene un trato especialmente obsequioso con éste, que contrasta con su ideología furiosamente anticomunista y su aversión al

régimen de la Unidad Popular. En el quinto y último discurso que Allende dirige al pueblo desde la Moneda, a las 9,10, calificará a Mendoza de «general rastreador, que sólo ayer manifestara su solidaridad y lealtad al gobierno». Al estallar el golpe, el futuro miembro de la Junta Militar ocupaba el octavo rango en la ordenación jerárquica de la institución.

Tras la constatación de que se ha perdido el último recurso de defensa militar, Allende, decidido a reducir el número de víctimas ante el eminente ataque, deja en libertad de acción a la guardia presidencial. Más tarde, contra su deseo, el general Sepúlveda seguirá a sus hombres, siendo el último oficial en retirarse de la Moneda. Antes lo habían hecho los tres adecanes militares. En esos momentos quedan

menos de cincuenta civiles en la sede gubernativa. Entre ellos, ministros, secretarios de Estado, asesores, algunos profesionales de confianza de Allende y 21 hombres pertenecientes a la escolta presidencial (15 militantes del Partido Socialista y 6 del Servicio de Investigaciones). Poca cosa que oponer a la violenta ofensiva que, pasadas las 9,30, iniciarán las tropas de infantería, apoyadas por los blindados y el vuelo rasante de los bombarderos Hawker Hunter. Abandonado por todos los sectores de las fuerzas armadas y carabineros, el gobierno también lo ha sido por la Dirección General de Investigaciones, o policía civil. Este cuerpo armado del estado estaba al mando del militante socialista Alfredo Joignant, designado en el cargo por el propio presidente de la repú-

blica. Integrado por unos seiscientos hombres equipados con metralletas, estaba a ser llamado el último baluarte del gobierno popular, y ninguna razón justificaba que cediera la más mínima posición. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió en aquella mañana del 11 de septiembre, cuando Joignant, por propia decisión, entrega el mando de la policía civil a un funcionario. Así lo comunica luego, telefónicamente, al Presidente Allende, quien por primera vez a lo largo de la dura jornada reacciona con sorda indignación. Los cincuenta resistentes de la Moneda están solos. Y aislados. Desde que el jefe de estado pronunciara su quinta alocución por Radio Magallanes, a través de los micrófonos conectados directamente con la emisora, el gobierno se encuentra completamente im-



El final del drama. Soldados y bomberos retiran de la Moneda el cadáver de Salvador Allende. Sería momentos después de que los militares fascistas acabaran de montar el «suicidio» del Presidente constitucional.



Vencida la resistencia de la Moneda, sus defensores son tratados con violencia por los golpistas. Dos días después, la mayoría de ellos serán torturados y asesinados.

posibilitado de continuar dirigiéndose a los trabajadores, ya que la estación radial ha sido bombardeada. Igual destino han corrido Radio Corporación y Radio Portales, también utilizadas por Allende para difundir sus primeros mensajes poco después de ingresar en la sede gubernamental.

Pero el aislamiento radial es el símbolo de un aislamiento real entre el gobierno y los millones de trabajadores que lo apoyan. Estos se encuentran «sin ninguna directiva, sin instrucciones, sin comunicaciones, sin capacidad orgánica para actuar» (7), esperando el desenlace de unos acontecimientos de los que, sin embargo, son principales actores y pueden llegar a ser principales víctimas. De hecho, ya han empezado a ser víctimas, como lo demuestran, entre tantos otros ejemplos, los 250 dirigentes sindicales obreros y campesinos fusilados en la industrial ciudad de Concepción, entre las 5 y las 8 de la madrugada del

(7) *Garcés, ob cit., pág. 283.*

mismo día 11, por orden del jefe de la Tercera División, general Washington Carrasco (8).

A las 11, tras una hora y media de combate, en la que sólo se escucha el tableteo de las ametralladoras, el gobierno es conminado a rendirse, bajo la amenaza de ser castigado con un severo bombardeo aéreo. La oferta es rechazada por Allende, quien decide continuar resistiendo hasta el final.

(8) *En la Presidencia, Carrasco había sido considerado siempre como uno de los generales «leales». Siendo coronel, acompañó al canciller Clodomiro Almeyda a Cuba, en julio de 1971.*



El golpe fascista se encontró con un pueblo desorganizado y desarmado. Muchos de quienes intentaron resistir no encontraron más remedio que hacerlo como francotiradores aislados, y fueron rápidamente reducidos. En la foto, el cadáver de un francotirador abandonado en la calle, como «escarmiento».



Inmediatamente después del golpe del 11 de septiembre, se organizan manifestaciones de repudio en la mayoría de las capitales del mundo, especialmente en Hispanoamérica. Como ésta, protagonizada por las juventudes políticas argentinas, en Buenos Aires.

Es la misma hora, aproximadamente, en que los dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, convocados urgentemente a una reunión clandestina en una fábrica de Santiago, resuelven no ofrecer resistencia y desmovilizar a los trabajadores. Inmediatamente, éstos serán exhortados a abandonar sus lugares de trabajo —que habían sido ocupados desde los primeros momentos del golpe— y regresar a sus casas.

Poco después de las 12 comienza el bombardeo de la Moneda. En varios pases rasantes, dos aviones Hawker Hunter dejan caer certeramente sus **rockets** sobre la sede del Poder Ejecutivo, incendiándola por los cuatro costados. Todo un símbolo: lo que se quiere destruir no es solamente un determinado gobierno, sino también la forma democrática del estado que hizo posible su surgimiento y consolidación.

El 29 de junio de 1973, du-

rante el «tancazo», el entonces comandante en jefe de la fuerza aérea, general César Ruiz Danyau —simpatizante de los amotinados—, se negó a cumplir la orden del Presidente de someter a bombardeo aéreo a los tanques que asediaban el palacio gubernamental. El argumento «técnico» con que fundamentó su negativa fue que las bombas podían dañar los edificios públicos vecinos. El 11 de septiembre de 1973, la falacia era evidente: los **rockets** habían dado exactamente en su objetivo, desatando densas columnas de humo que oscurecían el centro de Santiago.

DOS DE LA TARDE: EL DRAMA FINAL

Esa mañana, poco antes de que se conociera el primer comunicado de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, exigiendo la dimisión del Presidente, el jefe del Estado Mayor de la fuerza aé-

rea, general Von Schowen, había ofrecido poner a disposición de Allende un avión para abandonar el país. Renuente también él a dirigirse directamente al jefe del estado constitucional, se vale del adecán aeronáutico, quien, desde el Ministerio de Defensa, se comunica telefónicamente con Allende, para recibir la siguiente contestación: «Dígale al general Von Schowen que el presidente de Chile no arranca en avión, y que él sepa comportarse como un soldado, que yo sabré cumplir como presidente de la República». En esa misma breve conversación, Allende ordena al adecán que cubra inmediatamente su puesto habitual en la Moneda.

A lo largo de las dramáticas horas que se irán sucediendo ese día en el palacio presidencial, a Allende le tocará todavía escuchar a algunos de sus propios ministros intentándole disuadir de que entregue el gobierno como último re-



Pinochet muestra la cara. Cuatro días antes del golpe había escrito al ex comandante Prats, señalándole su «inquebrantable resolución de que el ejército continúe cumpliendo su función institucional y respaldando al Gobierno constitucional».

curso para poner a salvo su vida. Adhieren a esta posición Clodomiro Almeyda, de Relaciones Exteriores; Carlos Briones, del Interior; Jaime Tohá, de Agricultura; José Tohá, ex titular de Defensa e Interior, y Fernando Flores, secretario general de Gobierno, quienes a las 10,45 solicitan al mandatario una reunión a puerta cerrada, cuando ya ha sido bombardeada la residencia particular de Tomás Moro, y está a punto de serlo la propia sede gubernamental. La reunión, que sólo dura tres minutos, será interrumpida por Allende apenas los ministros hagan explícita su intención.

Como Pedro Aguirre Cerda en 1939, Allende está dispuesto a resistir. En aquella época, el jefe del gobierno del Frente Popular, ante un levantamiento de un sector de las fuerzas armadas, había permanecido intransigentemente en la Moneda, sede histórica de los gobernantes de Chile y símbolo concreto de su poder real. De esa actitud, que provocaría en primer lugar el replegue de los golpistas y fi-

nalmente su derrota, sería admirado testigo el propio Allende, entonces ministro socialista de Salud Pública en el gabinete presidencial. Sin embargo, treinta años después, la exacerbación de los antagonismos sociales volvían quimérica una situación similar. Las fuerzas armadas que el 11 de septiembre de 1973 asumían la representación de las clases vencidas en los comicios por la Unidad Popular, esta vez estaban dispuestas a pasar aun por encima del cadáver del jefe del estado y de las ruinas del palacio presidencial, lo mismo que por sobre los cadáveres de millares de trabajadores.

En estas circunstancias, el cumplimiento del mandato popular entrañaba un compromiso que sólo se detenía con la muerte. Allende lo sabía, y a ello se había referido públicamente durante una alocución pronunciada en diciembre de 1971, en el Estadio Nacional:

«Yo no tengo pasta de apóstol —había dicho— ni tengo pasta de Mesías, no tengo condiciones de mártir, soy un

luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado; pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás; que lo sepan: dejaré la Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, que lo oigan, que se les grave profundamente: defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno popular, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado; no tengo otra alternativa; sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo».

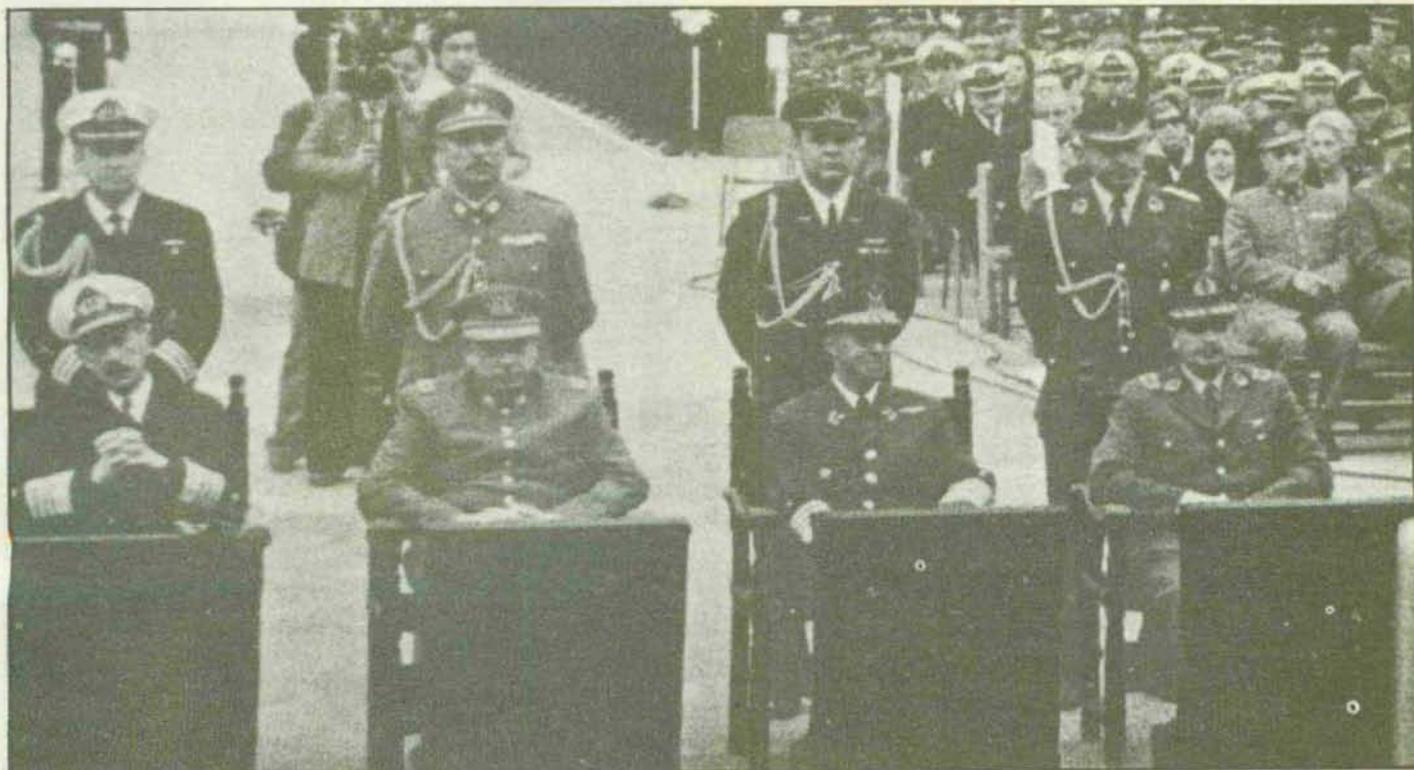
Y lo acribillarían. A las 11, una interceptación telefónica permite captar las siguientes palabras del general Enrique Baeza Michelsen, jefe de las operaciones en el centro de Santiago: «De los de la Moneda no debe quedar rastros, en especial de Allende; hay que exterminarlos como cucarachas...; el objetivo debe ser destruido por tierra y aire...».

Cercanas las 2, una patrulla de las tropas de infantería que están a cargo del general Javier Palacios Ruhman, logra superar el cerco defensivo, franqueando el acceso al edificio en llamas. Una vez dentro, sube por la escalera principal, que comunica con el Salón Rojo (el despacho presidencial), y se enfrenta a un grupo de civiles igualmente armados con ametralladoras FAL. La espesa humareda que invade el recinto impide que los invasores distingan al Presidente Allende entre ellos. Sólo después de que el jefe de la patrulla, el capitán Garrido, haya disparado, comprenderá que ha herido mortalmente al jefe del estado. Los civiles continuarán la batalla hasta casi las 3, en que son reducidos. La mayoría de ellos morirán torturados dos días después. La participación de los generales Baeza y Palacios en la operación concreta de destrucción del régimen de la Unidad Popular, será la última ironía de la política de duplicidad y traición de los

militares «profesionalistas» chilenos. Desde el 29 de junio, fecha del «tancazo», los dos generales figuraban en una lista de seis que el gobierno había decidido sustituir por sus claras actitudes golpistas. Sin embargo, hasta el momento de su renuncia a la comandancia en jefe, el 23 de agosto, el general Prats se había visto imposibilitado de pasarlos a retiro, debido a su propia situación de creciente debilidad y aislamiento en el seno del ejército. Al ser reemplazado por Pinochet, éste se compromete ante el Presidente a darlos de baja de la institución, sugiriendo a Allende que se abstenga de hacerlo por su propia cuenta (como comandante supremo de las fuerzas armadas), para no aparecer como dictando una decisión «política» ante los ojos de los altos mandos, que pondría en juego su «prescindencia» respecto de los asuntos internos del arma. No obstante, valiéndose de distintas argucias, el comandante en jefe pospone sucesi-

vamente la puesta en práctica de la medida, hasta que el golpe ya ha entrado en su etapa final de resolución, y ya es demasiado tarde para una rectificación presidencial que margine a quienes serán algunos de sus más eficaces ejecutores.

El 11 de septiembre, sobre los restos humeantes de la Moneda, se instaura el fascismo en Chile, clausurando un ciclo de democracia inédito, tanto en el país como en el resto de América Latina. Y, sin embargo, un año después, el 19 de septiembre de 1974, ante el comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Henry Kissinger tendrá todavía el coraje de afirmar: «Allende, elegido por una minoría, intentó sistemáticamente establecer un sistema de partido único y eliminar a todos los partidos y medios de información de la oposición». Exactamente lo que, desde el mismo día de su entronización, iban a hacer Pinochet y sus secuaces de la Junta Militar. ■ R. A.



La Junta Militar en pleno, durante una ceremonia religiosa. El almirante Merino y los generales Pinochet, Leigh y Mendoza acaban de prometer una larga época de proscripción, silencio y terror para el pueblo chileno.